

El mal existe

Estaban entre nosotros. Aquí estuvieron desde siempre. Hacían declaraciones infames y cometían actos despreciables. Durante un tiempo fueron dichos y actitudes ocasionales. En los encuentros sociales y familiares, en tono de broma, emitían opiniones y juicios incómodos, tolerados con condescendencia por los demás. En la calle, en el trabajo, en eventos públicos, se manifestaban de modo violento y repugnante. Tales actitudes no eran condenadas enérgicamente porque se consideraban arrebatos aislados y pasajeros.

Los noticieros y las redes sociales registraban casos mucho más graves de comportamientos antisociales, de brutalidades practicadas por desquiciados, de apología a crímenes horribles. Aunque impactantes, esos actos parecían desconectados de la realidad inmediata. Una matanza de inocentes en la periferia de una metrópolis cualquiera podía equipararse al ataque de un grupo armado en un desconocido país del Medio Oriente. El odio diseminado en las redes sociales era visto como una amenaza ficticia. La repetición constante de los casos más tenebrosos y el carácter sistemático de la violencia y la falta de civilidad provocaron una escalada de crímenes. El horror comenzó a materializarse en casos anteriormente inimaginables cuando, por ejemplo, en una simple disputa por la movilidad urbana, un chófer intolerante e inclemente atropella, de manera deliberada, a decenas de ciclistas o peatones; cuando el exterminio de pobres y negros se vuelve política de Estado por exigencia explícita de una parte de la población; cuando, por divergencias políticas, una pediatra se rehúsa a atender a un bebé enfermo. Cuando esos casos se multiplican y quedan impunes, dejan de ser un problema individual. Aquí, es el carácter moral colectivo el que necesita ser cuestionado.

A pesar de la inseguridad y de los traumas relacionados con el aumento de la criminalidad, esta era considerada por el sentido común como un producto de acciones de individuos o facciones marginales, de criminales o pandillas de barrios pobres, todos ellos procedentes del submundo. Un submundo como el de cualquier país. La autoproclamada “buena sociedad” era solo la víctima. Algunos análisis grandilocuentes llegaron al punto de clasificar el fenómeno en términos de guerra civil, culpando al Estado por todo y, al mismo tiempo, no considerando las manifestaciones de inhumanidad, de odio por parte de algunos sectores de la población vistos como normales. Cuanto más hipócrita es la violencia, más siniestra y trágica resulta.

No existe una fecha precisa en la que podamos identificar cuándo empezaron a incrementarse las manifestaciones de maldad en muchos países de América Latina. Gente que derrocha prejuicios, racismo, intolerancia y odio existe desde siempre. Sin embargo, los casos más escabrosos quedaban dentro de los marcos regidos por las normas sociales, por las políticas públicas y por los aparatos legales.

Es posible reconocer en la esfera pública algunos factores que contribuyeron a potencializar las conductas destructivas. Tal como sucedió con la esclavitud, nunca hubo *un mea culpa* por parte de regímenes dictatoriales. Frecuentemente, el Poder Judicial avaló procesos de autoamnistía y los perpetradores no solamente quedaron impunes sino también ganaron legitimidad ante una parte de la población. Al inicio del siglo *xxi* se multiplicó el número de políticos, presentadores de programas policiacos en la radio y en la televisión, influenciadores en las redes sociales, pastores fundamentalistas profiriendo discursos reaccionarios, todos avivando y defendiendo ideas y prácticas intolerantes y discriminatorias. En primer lugar, oponiéndose de manera furiosa a los derechos humanos, a la libertad de culto y de cátedra, a los principios elementales de justicia; en segundo, defendiendo la dictadura,

la represión y la tortura, proponiendo la eliminación física de los pobres y el ajusticiamiento de sospechosos.

Esas personalidades públicas interactuaban con aquellos individuos deshumanizados que hasta ese momento se encontraban dispersos en la sociedad, amplificando y legitimando ideas y prácticas intolerantes y reaccionarias. Los grandes medios de comunicación, importantes autoridades públicas, instituciones de la sociedad civil y, sobre todo, instancias del Poder Judicial, no solo se quedaron calladas sino también fungieron como caja de resonancia de prácticas torpes, volviéndose cómplices de lo peor que ciertos segmentos sociales mostraban. Algunos programas de televisión y de radio con gran audiencia popular promovieron diariamente la exposición de crímenes-espectáculo, mientras fuerzas policiacas protegían a los impiadosos agresores. Aunque minoritarios, jueces y promotores fueron responsables por exacciones inconstitucionales bajo la mirada apática de la mayoría de sus colegas y de aquellos que deberían ejercer funciones correctivas.

Sería fácil identificar a esas personalidades corresponsables de la degradación del carácter moral colectivo: políticos, secretarios de Estado, religiosos, cronistas de los grandes medios, presentadores de programas de televisión que muestran con detalles crímenes bárbaros. Pero ¿y los otros? ¿Y la tía Juanita? Señora piadosa y caritativa que siempre da limosna a los pobres frente al supermercado. ¿Y el vecino del departamento 201? Trabajador, honesto, le gustan los perros. ¿Y la señora Ana Lupe? Servidora pública jubilada que jamás se involucró en política, que pasa horas en Facebook publicando fotos de sus nietos y de sus viajes. ¿Y el primo Oscar? Empresario promedio que administra con diligencia su negocio y todos los sábados trabaja como voluntario en la periferia.

En los últimos años, estos personajes y miles de otros desbordan odio, piden que regrese la dictadura, piensan que los defensores de la democracia merecen ser torturados, abominan la universidad, creen que todos los sospechosos de

delitos deben ser eliminados sumariamente, execran los derechos humanos, escriben indecencias en las redes sociales, creen en las más incongruentes *fake news*. Maestra de una escuela secundaria, después de una visita al campo de exterminio en Auschwitz, visiblemente impresionada, comenta: “*Un horror. Pero, al menos, Hitler hizo una buena limpieza en Europa*”. Abogada incita públicamente al estupro y la muerte de las hijas de los jueces que reafirmaron un principio constitucional. Procuradores del Ministerio Público, con salarios pagados por la población, destilan odio e impiedades inconcebibles frente a la muerte de inocentes. En el día del entierro de su esposa, ofenden a un expresidente de la República, se burlan de su sufrimiento, sugieren que la trágica muerte fue “una quema de archivos”, niegan el carácter humano a aquel que perseguían de manera encarnizada. Algunas publicaciones en las redes sociales son tan torpes y repugnantes que sería ignominioso reproducirlas.

¿Cómo designar a los autores de esas barbaries? ¿Fascistas? ¿Perversos? ¿Psicópatas? ¿Locos? ¿Demonios?